



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SALA MIXTA DE DECISIÓN**

Medellín, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

EJECUTANTE	FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE
EJECUTADA	LIBERTY SEGUROS S.A.
TIPO DE PROCESO	Conflicto de Competencia
RADICADO NACIONAL	05001 22 00 000 2022 00019 00
DECISIÓN	Declara competente al Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Oralidad de Medellín

La Sala Mixta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados MARIA PATRICIA YEPES GARCIA, ponente, NELSON SARAY BOTERO y JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO, procede a decidir sobre el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en orden al conocimiento del ejecutivo promovido por Fundación Clínica del Norte contra Liberty Seguros S.A. <sup>1</sup>

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, adoptó el proyecto presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

**I. ANTECEDENTES DE LA DEMANDA**

La FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE formuló demanda ejecutiva singular contra LIBERTY SEGUROS S.A., pretendiendo se dicte orden de apremio contra esta última por valor de Treinta y Cuatro Millones Setenta y Siente Mil Once Pesos (\$34'077.011), correspondiente a sendas facturas generadas en virtud de la prestación de servicios médicos y hospitalarios por parte de la ejecutante a pacientes que sufrieron accidentes de tránsito y se encontraban amparados en pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT- a cargo de la aseguradora ejecutada; así como al pago de intereses moratorios a la tasa

<sup>1</sup> **Nota:** Se advierte que el expediente del presente conflicto de competencia fue remitido a la oficina de apoyo judicial de este tribunal para su reparto el 2 de diciembre de 2021, como se desprende del archivo01OficioRemisiorio.pdf contenido en la carpeta 02CuademoTribunal; la misma solo fue repartida el 10 de marzo de 2022 al Despacho de la ponente, debido a un error involuntario de la Secretaría de la Sala Civil, tal y como se hace constar en el archivo 02InformeSecretarial.

máxima legal, causadas a partir del vencimiento de las facturas constitutivas del título valor, hasta su pago efectivo<sup>2</sup>.

La demanda fue repartida inicialmente al **Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, el cual mediante auto del 16 de abril de 2021<sup>3</sup>, rechazó la demanda y ordenó remitirla a los Jueces Municipales de Pequeñas Causas Laborales de Medellín – Reparto, al considerar que la competencia para conocer el asunto estaba radicaba en tal especialidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993.

Por nuevo reparto se asignó el expediente al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín<sup>4</sup>, quien mediante auto del 6 de julio de 2021 rechazó la demanda por carecer de competencia en razón de la cuantía, disponiendo la remisión del expediente para su reparto ante los Jueces Laborales del Circuito de Medellín<sup>5</sup>.

Asignada esta vez al **Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín**, en proveído del 1° de octubre de 2021<sup>6</sup> negó ser competente para resolver la acción impetrada suscitando el conflicto negativo de competencia con el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Oralidad de Medellín, porque si bien es cierto el numeral 5° del artículo 2° del CPTSS, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 previó la competencia del juez laboral de los asuntos relacionados con la ejecución de obligaciones emanadas del Sistema de Seguridad Social Integral que no estuvieran asignados a otra autoridad, **dicha competencia varió** con la modificación introducida por **el artículo 622 del GGP al numeral 4° del CPTSS** citado, al suprimir la expresión “*cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan*”, disponiendo que los asuntos relacionados con responsabilidad médica y contratos no serán de conocimiento de la especialidad laboral, y dado que la ejecutante pretende con su acción el cobro de títulos valores representados en facturas derivadas de obligaciones de carácter civil o comercial, concluyó en la imposibilidad de resolver de fondo el asunto puesto a su consideración.

Para respaldar su decisión invoca el auto emitido por la Sala Plena de la H. CSJ, APL2642-2017 en cuanto a que este tipo de procesos deben ser conocidos por el juez civil, y en consonancia lo pregonan la Sala Laboral de la Alta Corporación, en autos AL4314 de 2017, AL3171 de 2020, AL4302 de 2021 y AL2399 de 2021.

---

<sup>2</sup> 03EscritoDeDemanda.pdf, contenido en carpeta01UnicaInstancia.

<sup>3</sup> 03EscritoDeDemanda.pdf, págs 1955/1958; contenido en carpeta01UnicaInstancia.

<sup>4</sup> 02ActaDeRepartoDeDemandaEjecutiva1257FundacionClinicaDelNorte; contenido en carpeta01UnicaInstancia.

<sup>5</sup> 05AutoRechazaDemanda.pdf; contenido en carpeta01UnicaInstancia.

<sup>6</sup> 02PromueveConflictoNEgativoDeCompetencia; contenido en carpeta01PrimerInstancia.

## II. SON CONSIDERACIONES DE LA SALA MIXTA DEL TRIBUNAL

Conforme al inciso segundo del artículo 18 del Estatuto de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), corresponde a las Salas Mixtas del Tribunal Superior de Medellín, dirimir el conflicto de competencia planteado entre autoridades jurisdiccionales de diferente categoría y especialidad de este distrito judicial.

Para resolver el asunto en concreto debe indicarse que, la competencia se define como el grado o la medida de la jurisdicción, y tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo el principio de seguridad jurídica.

El artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y por el artículo 622 del Código General del Proceso, atribuye competencia a la jurisdicción ordinaria laboral en sus especialidades laboral y seguridad social, para conocer en materia de seguridad social:

(...)

*“4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. (Subraya intencional del Tribunal).*

*5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.*

(...)

Por su parte, el artículo 15 del Código General del Proceso implantó la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Tal norma dispone:

(...)

**ARTÍCULO 15. CLÁUSULA GENERAL O RESIDUAL DE COMPETENCIA.**

*Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción.*

***Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria.***

*Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. (Negrilla fuera del texto)*

(...)

Para dirimir el conflicto planteado entre los referidos despachos judiciales, se debe analizar las pretensiones a la luz de su estructura, según los elementos subjetivo, objetivo y causal.

Integran el elemento subjetivo: el demandante, cuyo rol en el debate se circunscribe a presentar, fundamentar y acreditar su petitum; el demandado quien está facultado para oponer resistencia, y el juez quien es el destinatario de la pretensión. El elemento objetivo constituye el reclamo específico alegado por el actor, y el causal denota el fundamento fáctico de la solicitud.

La FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE incoó demanda ejecutiva singular contra LIBERTY SEGUROS S.A., solicitando dictar orden de apremio para obtener el pago facturas generadas por valor de Treinta y Cuatro Millones Setenta y Siente Mil Once Pesos (\$34'077.011), en virtud de la prestación de servicios médicos y hospitalarios a usuarios que sufrieron accidentes de tránsito y se encontraban amparados por las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT- a cargo de la aseguradora ejecutada; además del pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal, desde el vencimiento de las facturas y hasta su pago efectivo.

En el sub judice la demanda que se estudia no deriva de una controversia en la prestación de los servicios de la seguridad social, toda vez que estos se brindaron, y en ningún aparte del escrito inicial o documento allegado se vislumbra discusión frente a la prestación del servicio, sino en torno al cobro de facturas generadas como consecuencia de la prestación de servicios médicos y hospitalarios en virtud de pólizas de seguro a cargo de la LIBERTY SEGUROS S.A., títulos de los que subyace un negocio jurídico o contrato, civil o comercial, que constituye la fuente de tales obligaciones, asunto enmarcado en la competencia propia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, y no de la especialidad laboral, puesto que tal materia escapa de la órbita de la seguridad social. Distinto sería, si se tratara del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas o asistenciales que brinda el Sistema de la Seguridad Social.

Debe precisarse que no todo conflicto donde esté inmersa la prestación del servicio de salud es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, ya que lógicamente la competencia de esta especialidad se relaciona con el factor objetivo por la materia y no por un factor subjetivo; y en el presente caso, la base del litigio se origina en el cobro de facturas de servicios médicos y hospitalarios ya prestados, en virtud de una póliza de seguro.

La Corte Constitucional, ha indicado que la competencia del juez laboral radica en asuntos específicos de la seguridad social y **no** sobre todo lo que tenga relación con tal especialidad:

(...)

*En ese orden de ideas resulta claro entonces, que la asignación de las competencias fijadas por leyes posteriores (Ley 712 de 2001 y 362 de 1997), donde se asignó la competencia a la jurisdicción ordinaria, para conocer los asuntos comprendidos dentro del sistema de “seguridad social integral”, no puede ir más allá de la órbita fijada por el legislador y abarcar aspectos que se mantienen en otras jurisdicciones, u otras especialidades de la jurisdicción ordinaria, ya que las diferencias susceptibles de conocimiento de los jueces del trabajo en esta materia, se refieren al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales económicas y de salud establecidas en favor de los afiliados y beneficiarios en la Ley 100 de 1993 a cargo de entidades que conforman el “Sistema Integral de Seguridad Social”, así como las que se suscitan sobre los servicios sociales complementarios contemplados en la misma Ley 100 de 1993 “y no las que hacen parte de un sistema de prestaciones a cargo directo de los empleadores públicos y privados, cuya competencia se mantiene en los términos previstos en las leyes anteriores, por cuanto en “estricto sentido no hacen parte del dicho Sistema Integral de Seguridad Social (...)”.*<sup>7</sup>

En el mismo sentido se pronunció la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en providencia **APL2642-2017 de 2017**, reiterada en auto **APL2208 de 2019**, en la que expuso:

*“(...) Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:*

*(...) Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.*

*(...).*

*Ocorre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.*

*La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.*

***La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se***

---

<sup>7</sup> Ver sentencias C-1027/02 y T-499 de 2008

***obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.***

*Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre la Entidad Promotora de Salud Cafesalud S.A., y la Prestadora del servicio Hospital Universitario de Bucaramanga, la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. (...)” (negrillas propias)*

En tal sentido también se pronunció la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia al resolver un conflicto de competencia frente al cobro de servicios de salud en proceso ordinario, mediante auto AL2399 del 5 de mayo de 2021, disponiendo que la competencia de dichos asuntos corresponde a los jueces civiles.

Atendiendo a lo expuesto, no es de recibo lo argumentado por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Oralidad de Medellín, por cuanto, el presente asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, y por tanto, él es el competente para tramitarlo.

En mérito de lo expuesto, La Sala Mixta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: DIRIMIR** el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Oralidad de Medellín, atribuyendo a este último el conocimiento del proceso ejecutivo singular promovido por la Fundación Clínica del Norte contra Liberty Seguros S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO: REMITIR al JUZGADO VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN** el proceso de la referencia, para que continúe con el trámite correspondiente, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** por Secretaría de este Tribunal la presente decisión al JUZGADO VEINTITRÉS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA  
Sala Laboral



NELSON SARAY BOTERO  
Sala Penal



JUAN CARLOS SOSSA LONDOÑO  
Sala Civil